



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Referencia:

Expediente: 11001 33 35 010 **2021 00291 00**.
Accionante: Carol Viviana Ospina.
Accionado: Secretaría Distrital de Movilidad.
Clase: Constitucional – Acción de Cumplimiento.

El Despacho procede a pronunciarse sobre la acción de cumplimiento de la referencia, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 393 de 1997.

Para decidir se **CONSIDERA:**

El artículo 10¹ de la Ley 393 de 1997 señala el contenido del escrito de la acción de cumplimiento. El Despacho estima que, en el caso puesto a consideración, no se cumplen a cabalidad con los requisitos enunciados en seis (6) numerales de los siete (7) en que se escinde la citada norma. En los párrafos que siguen, se pondrá en conocimiento de la interesada, las razones por las cuales no se cumplen con los respectivos numerales del artículo 10 de la Ley 393 de 1997.

¹ “ARTICULO 10. CONTENIDO DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá contener:

1. El nombre, identificación y lugar de residencia de la persona que instaura la acción.
 2. La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido. Si la Acción recae sobre Acto Administrativo, deberá adjuntarse copia del mismo. Tratándose de Acto Administrativo verbal, deberá anexarse prueba siquiera sumaria de su existencia.
 3. Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento.
 4. Determinación de la autoridad o particular incumplido.
 5. Prueba de la renuencia, salvo lo contemplado en la excepción del inciso segundo del artículo 8º de la presente Ley, y que consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva.
 6. Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer.
 7. La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.
- PARAGRAFO. La solicitud también podrá ser presentada en forma verbal cuando el solicitante no sepa leer ni escribir, sea menor de edad o se encuentre en situación de extrema urgencia.”.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

El numeral 1º exige que la accionante indique el *“lugar de residencia de la persona que instaura la acción”*. Este texto, se puede armonizar con los artículos 3º de la Ley 393 de 1997 y 156 (Num. 10³) del CPACA, según los cuales el domicilio del demandante determina la competencia. Al revisar la demanda, no se aprecia, en alguno de sus acápites, que se haga mención del domicilio de la demandante. Por ello, este aspecto deberá ser corregido, es decir, indicar cuál es el domicilio de quien instaura la acción de cumplimiento.

El numeral 2º le indica a la persona interesada en ejercer este tipo de acciones constitucionales, que la demanda debe ser expresa en *“La determinación de la norma con fuerza material de Ley o Acto Administrativo incumplido”*. Vale armonizar este numeral, con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Ley en estudio, en cuanto disponen que el titular de la acción la debe ejercer para hacer cumplir *“normas con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”*.

El Despacho procedió a leer las pretensiones de la demanda con el fin de establecer frente a que disposición de orden legal o actuación administrativa se exigía el cumplimiento. Ni en el aludido acápite, ni en los demás apartes de la demanda, se identifica la norma que se quiere hacer cumplir por parte de la administración.

En realidad, en el escrito introductorio discurre en torno al cumplimiento de una providencia judicial: la Sentencia C-428 de 2019. Aunque en esta providencia, la Corte Constitucional se pronuncie sobre la exequibilidad del artículo 26 de la Ley 769 de

² “ARTICULO 3o. COMPETENCIA. De las acciones dirigidas al cumplimiento de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.”.

³ “ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

...

10. En los relativos al medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, se determinará por el domicilio del accionante

...”.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

2002, en armonía con el artículo 3º de la Ley 1696 de 2013⁴, ello no es suficiente *per se*, para estimar satisfecho el presupuesto del numeral 2º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997. Es claro, que a la accionante le corresponde identificar, con toda precisión, la ley o acto administrativo (con su artículo o inciso), que se pretende hacer cumplir, pues ello determina el cauce del proceso, y por ende, la viabilidad del juicio.

En conclusión, y para cerrar este punto, quien acude a esta sede judicial, deberá señalar en las pretensiones cuál es la norma (acto del legislador o acto administrativo, que NO acto judicial) que se pretende hacer cumplir. Ello implica identificar, con claridad, la orden dada en la ley o acto administrativo que la administración se abstiene de cumplir, y señalar expresamente que quiere que haga la Secretaría Distrital de Movilidad frente a su situación particular.

Pasamos al numeral 3º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997 que, textualmente, exige “*Una narración de los hechos constitutivos del incumplimiento*”. Si bien, la demanda contiene un acápite denominado “hechos”, allí se limita a expresar que puso en renuencia a la entidad. Sin embargo, a quien la asiste el interés en la prosperidad del mecanismo de origen constitucional, no manifiesta en que consiste la omisión de la administración en cumplir la ley o acto administrativo. Tampoco indica la actuación administrativa, que le permite afirmar que no se cumple con lo dispuesto en la ley o acto administrativo. Incluso, bien puede indicar tanto la omisión y la actuación con la

⁴ Primero.- Declarar EXEQUIBLES los numerales 1º y 2º de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, por el cargo analizado.

Segundo.- Declarar INEXEQUIBLE el numeral 4º de la primera parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002.

Tercero.- Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado en esta sentencia, el inciso final del artículo 3º de la Ley 1696 de 2013, el cual dispone que “*Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción*”, EN EL ENTENDIDO de que se aplica única y exclusivamente a la causal contemplada en el numeral 4º de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.

Cuarto.- EXHORTAR al Congreso de la República para que, de acuerdo con la parte motiva de esta sentencia, regule el término en el cual los conductores a quienes se les cancele su licencia de conducción por alguna de las causales dispuestas en los numerales 1º, 2º, 5º, 6º y 7º de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002 pueden volver a solicitar una nueva licencia de conducción.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

que la demandada se contrapone a la orden contenida en una ley o en un acto administrativo. Es evidente que este defecto, es consecuencia de no haber identificado la orden legal o administrativa - se reitera que NO judicial - que pretende hacer cumplir.

No sobra, traer a colación, que el artículo 8º (Inc. 1º) de la Ley 393 de 1997 se refirió a la procedibilidad de la acción de cumplimiento, en los siguientes términos: “*La Acción de Cumplimiento procederá contra toda acción u omisión de la autoridad que incumpla o ejecute actos o hechos que permitan deducir inminente incumplimiento de normas con fuerza de Ley o Actos Administrativos*” (Se subraya a propósito). Se sigue del texto, jurídico que el operador jurídico tiene que confrontar lo que dice una ley o acto administrativo, con el acto o hecho expreso o presunto de la entidad.

Fíjense, que no es caprichoso que se identifique con suficiencia las omisiones o actos en que incurre la administración, pues sólo ello puede dar pie para sostener que se incumple una disposición legal o administrativa. Por manera, que narrar tal tipo de hechos, se requiere para garantizar el enjuiciamiento de la entidad, y el cumplimiento del numeral 3º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997.

Frente al requisito del numeral 4º ibídem, no se tienen reparos, pues la acción se ejerce, sin lugar a dudas, contra la Secretaria Distrital de Movilidad. No obstante, si la accionante tiene otro criterio, sea esta la oportunidad para que identifique contra que otra autoridad se interpone la presente acción, si es pertinente.

Por tanto, se avanzará al numeral 5º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997, en cuanto dispone que la prueba de la renuencia “*consistirá en la demostración de haberle pedido directamente su cumplimiento a la autoridad respectiva*”. Si bien, la demande anexo el escrito de renuencia enviado al correo electrónico de la Secretaría Distrital de Movilidad, este no exige el cumplimiento de una ley o acto administrativo, sino de una providencia judicial, documento frente al cual no cabe predicar la renuencia.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

Esto significa que deben coincidir las pretensiones con el escrito de renuencia. Siendo así, como no se acepta que se pretenda hacer cumplir la Sentencia C-489 de 2019, tampoco resulta válido aceptar la renuencia allegada al plenario frente a la precitada Sentencia de constitucionalidad. Por ello, se deberá aportar el escrito de renuencia pero frente una ley o acto administrativo. En este sentido, el Despacho remite a la demandante a lo considerado con anterioridad respecto de las pretensiones.

Al avanzar al requisito del numeral 6º del artículo 10 de la Ley 393 de 1997 se encuentra que la accionante debe hacer la *“Solicitud de pruebas y enunciación de las que pretendan hacer valer”*. La demanda no contiene el acápite de pruebas. Tampoco se advierte que se indica con que prueba, distinta a la renuencia, se pretende demostrar que la administración provoca el incumplimiento. Se reitera que incumplimiento que constituye el objeto de la presente acción, sólo puede ser la ley o acto administrativo que se identifique al corregir la demanda. Por ello, la demandante debe identificar en un acápite especial las pruebas que le sirven de sustento a la acción.

El requisito del último numeral, el 7º *ibídem*, dice así: *“La manifestación, que se entiende presentada bajo gravedad del juramento, de no haber presentado otra solicitud respecto a los mismos hechos o derechos ante ninguna otra autoridad.”*. En todo el recorrido que se hizo de la demanda, no se encontró alguna manifestación en el sentido que se transcribe del precitado numeral 7º. Ello se deberá corregir, es decir, deberá manifestar que si ha presentado otra solicitud, que sea igual a los hechos o derechos que motivan el ejercicio de la presente acción.

A manera de conclusión definitiva, la presente acción no satisface los requisitos del artículo 10 de la Ley 393 de 1997, con excepción del requisito de su numeral 4º. A manera de síntesis, y sin que ello se pueda utilizar como pretexto para desconocer lo hasta aquí razonado, la demandante debe corregir la demanda en el sentido de identificar: (i) su domicilio o lugar de residencia; (ii) la ley o acto administrativo que



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

pretenda hacer cumplir con respecto a su situación particular, (iii) el hecho omisivo o la actuación de la demandada que hace que se incumpla la ley o acto administrativo, (iv) aportar la renuencia respecto de una ley o acto administrativo, porque no vale frente a un acto o providencia judicial (Sentencia C-489 de 2019), (v) las pruebas con las que pretende demostrar el incumplimiento, y (vi) la manifestación de que no ha presentado una solicitud igual a las pretensiones y hechos que corrija.

Para el efecto, la demandante deberá tener en cuenta el plazo que le otorga el artículo 12 de la Ley 393 de 1997. Conforme a esta norma, debe saber que sólo tiene dos (2) días para corregir el contenido de la demanda, en los puntos ya indicados. Igualmente, no puede perder de vista que *“Si no lo hiciere dentro de este término la demanda será rechazada”*, tal como se extrae de la misma norma. Es por ello, que sólo se le concederán dos (2) para presentar el escrito de corrección, término que se contará a partir de la notificación del presente auto.

De igual modo, la demandante debe conocer que *“Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno”*, por expresa disposición del artículo 16 de la Ley 393 de 1997. En cuanto a autos, excepcionalmente procede la reposición frente al auto que niegue la práctica de pruebas, según la precitada norma⁵. Con ello se quiere decir, que el término de los dos (2) días para corregir la demanda, no es susceptibles de dilatación alguna, ni la ley autoriza la prórroga. Así lo dispone el artículo 11 ibídem: *“Los términos son perentorios e improrrogables”*.

Por lo anterior, se **RESUELVE**:

PRIMERO. INADMITIR la acción de cumplimiento interpuesta por Carol Viviana

⁵ “ARTICULO 16. RECURSOS. Las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento, con excepción de la sentencia, carecerán de recurso alguno, salvo que se trate del auto que deniegue la práctica de pruebas, el cual admite el recurso de reposición que deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación por estado y resuelto a más tardar al día siguiente.”.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Sección Segunda

Expediente: 11001 33 35 010 2021 00291 00

Ospina, con cédula de ciudadanía 1.121.855.840, contra la Secretaría Distrital de Movilidad, por las razones antes expuestas.

SEGUNDO. ORDENAR que se corrija la demanda en cada uno de los puntos mencionados a lo largo de este proveído, los cuales corresponden a los numerales 1, 2, 3, 5, 6 y 7 del artículo 10 de la Ley 393 de 1997, conforme lo aquí expresado.

TERCERO. CONCEDER a la demandante dos (2) días para que corrija la demanda en los aspectos ya indicados, contados a partir de la notificación de la presente providencia. El incumplimiento de este término dará lugar a rechazar la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 393 de 1997.

CUARTO. ADVERTIR a la demandante que contra esta decisión no proceden recursos, por lo que se tendrá que corregir en el término anteriormente estipulado, conforme lo expresado en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

gpg